**IMPLICACIONES PENALES DERIVADAS DE LOS DELITOS AMBIENTALES
COMETIDOS EN EL VÍA PARQUE ISLA SALAMANCA DURANTE LOS AÑOS
2018-2020¹**

**JOSÉ ENRIQUE FINCE MEJÍA²
LEILA VANESSA PÉREZ RAMOS³**

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo tiene como propósito llevar a cabo un análisis de los impactos devenidos de los delitos ambientales que confluyen en el Vía Parque Isla Salamanca durante los años 2018-2020, teniendo como fundamento que, en dicho lapso, se ha presentado un aumento considerable de incendios forestales que se encuentran asociados a conductas llevadas a cabo en esos territorios, tendientes a la explotación mineral y otras actividades.

Las anteriores, ameritan ser analizadas desde una perspectiva penal para efectos de establecer cuáles son los delitos que se presentan, máxime cuando estos tienen como carácter fáctico que se presentan en zonas de reserva forestal, cuya especial protección a cargo del Estado debe ser garantizada, respondiendo sobremanera a preservar el medio ambiente y propender por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS): Acción por el clima, Vida submarina y Vida de ecosistemas terrestres; mismos que son conexos a los objetivos de Salud

¹Ensayo producto del proyecto de investigación: “Implicaciones penales derivadas de los delitos ambientales cometidos en el vía parque isla salamanca durante los años 2018-2020”.

²Abogado de la Corporación Universitaria Americana. Candidato a Especialista en Derecho penal y criminología de la Universidad Simón Bolívar. Se desempeña como Técnico Investigador del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de la Nación. Correo electrónico: josefince@hotmail.com

³Abogada de la Universidad Libre, candidata a Especialista en Derecho penal y criminología de la Universidad Simón Bolívar. Se desempeña como Abogada en la Universidad del Atlántico. Correo electrónico: leilavanessap@hotmail.com

y bienestar y de Paz, justicia e instituciones sólidas. Lo anterior, debido a que de estas prácticas convergen metas e indicadores de desarrollo que son de especial interés para la preservación y la sostenibilidad del ecosistema, la salud de las poblaciones circundantes como Barranquilla-Atlántico y Sitionuevo-Magdalena y la impartición de justicia sobre delitos que confluyen. De modo que resulta indispensable precisar una relación de las conductas punibles con dichos objetivos.

Es menester tener en cuenta que, para reducir las prácticas delictivas que confluyen en el Vía Parque Isla Salamanca, se debe entender que entre los delitos concretos como el de Incendio, que es producto de conductas, también de carácter penal, se desprenden desafíos para el cumplimiento de los ODS. Ello desde mayor fortalecimiento de seguridad institucional, sanción penal de estas prácticas y la preservación efectiva de estos territorios.

Este ensayo se desarrolla a partir de un enfoque de investigación cualitativo, en la medida que se pretende llevar a cabo un análisis explicativo sobre los hechos y causas conceptuales y jurídicas que surgen con relación a los delitos ambientales que confluyen en el Vía Parque Isla de Salamanca entre 2018-2020, determinando las causas que incentivan estas prácticas y planteando la necesidad de desarrollo legislativo y políticas criminales. Metodológicamente se empleará una base de datos derivada, técnica que es sugerida por Hernández (2014, pág. 12).

Así las cosas, se describirá a partir del análisis un desarrollo histórico de los delitos ambientales, pues su interpretación podría vislumbrar las razones por las cuáles se presenta un escaso tratamiento normativo. En un segundo acápite, se responderá cuáles son los tipos penales y ODS asociados al problema de investigación, exponiendo la presencia de retos en materia judicial y sancionatoria para disminuir los incendios forestales, aplicando además, datos que conllevan a la muestra sobre la estructura del fenómeno a estudiar sobre la efectividad judicial,

que parte de la incógnita sobre las conductas punibles y sus impactos, presentando desafíos de sostenibilidad frente a los índices de delitos, lo que pondría en riesgo los bienes jurídicos tutelados.

HISTORIA DE LOS DELITOS AMBIENTALES

Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, era poco el interés por enfocar los estudios a temas ambientales, o al menos, centrar la atención sobre consecuencias derivadas de la explotación de recursos naturales que tenían lugar durante ese periodo. En 1900, las naciones europeas llevaron a cabo la Convención de Londres, la cual tenía como finalidad la protección de la vida silvestre en África, que ya era reconocida como exótica, pero empezaba a sufrir efectos de la sobreexplotación y la caza. Sin embargo, aquel pacto nunca entró en vigor por no ser aprobada ni firmada por un número mínimo de partes. Dicho pacto fue pospuesto, y en 1933 por fin logró su aprobación sobre gran parte del territorio africano, ya repartido y colonizado entre las naciones europeas. Con base en ello se crearon diversos parques naturales y la protección de especies, lo anterior, con base en lo planteado por Ortúzar (2020).

No obstante, si bien se presentaron algunas políticas internacionales como la anterior, el enfoque e interés que tenía mayoritariamente el mundo por aquel entonces, era potenciar la economía, para lo cual seguían una teoría neoclásica, debido a la necesidad de superar las crisis que habían causado los grandes estallidos de violencia y guerra que causaron depresión (2020). Con posterioridad a la segunda guerra mundial y pronósticos de armonía, al menos por un periodo, dada la seguridad o confianza que dio la creación de la ONU y la Convención de Ginebra de 1949, los Estados, académicos y organizaciones alrededor del mundo, empezaron a centrar su mirada hacía nuevos campos de estudio, pero, en los años sesenta fue cuando se empezó a pensar globalmente sobre los peligros que afrontaba el planeta en materia ambiental con la publicación de Carson (1962) sobre los efectos de plaguicidas en la biodiversidad. De ahí con la Declaración

de Estocolmo (1972) se lleva a cabo a la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano y se avanzó en el fortalecimiento de políticas ambientales enfocadas en preservar el ambiente, ordenando a los firmantes garantizar que todas las actividades en sus respectivas jurisdicciones, no causaran daños de este tipo, per se, o a otros Estados. De igual modo se avanzó con el Principio de Cooperación, por el cual los países debían unir esfuerzos para cumplir desafíos globales en común, creándose en Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA (PNUMA, 1972).

Uno de los avances más trascendentales se presenta con la Creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, derivada de la Comisión que presentó el Informe Brundtland (1987), con el cual se origina el concepto de Desarrollo Sostenible como la satisfacción de necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En simultáneo, había problemáticas ambientales en torno al cambio climático y pérdidas en la capa de ozono, por lo que se firmó el Protocolo de Montreal, como medida tendiente a la disminución de los impactos ambientales (ONU, 1987). Posteriormente, se presenta la Convención de Río de 1992 frente al cambio climático donde se cimientan las bases de los Objetivos del Milenio - OM, tendientes a proteger y preservar tanto la vida como el ambiente (ONU, 1992). Tales aspectos fueron recogidos en la Declaración del Milenio (ONU, 2000) y posteriormente se da la Cumbre mundial de la ONU sobre Desarrollo sostenible (2002) y la Convención de París (2012). Hasta así, llegar a la fijación de los ODS, con el objeto de cumplir los 17 puntos fijados, entre los cuales, se encuentran algunos revestidos de componentes ambientales, preservación de recursos naturales, creación de políticas y legislación que propenda por la justicia ambiental (UN, 2015).

Ahora bien, como se puede analizar, luego de establecer políticas y legislación ambiental, se tiene que los delitos ambientales tienen su génesis a partir de la estructuración y consolidación del derecho ambiental, con lo cual, se hacía necesario establecer normas jurídicas que garantizaran no sólo la protección del ambiente, sino también, sanciones ante daños que se les ocasionara. En ese orden, los antecedentes a estos delitos se encuentran directamente relacionados a los orígenes de las políticas ambientales, como medida de respuesta ante vulneraciones eventuales. Como caso particular, se presentan importantes sistemas jurídicos en Estados Unidos de América a partir de los ochentas, para la protección penal del medio ambiente, incluyendo mecanismos de política criminal, un sistema penal de protección ambiental, programas de desafíos institucionales para el desarrollo sostenible y normas federales y estatales para garantizar la preservación natural según expone Orellana (2002). En igual sentido, países como España también mostraron gran interés en desarrollar legislación penal asociada, incorporando en 1995 en su Código Penal el Capítulo de los delitos contra el medio ambiente y supuestos relativos a la protección de flora y fauna, en atención a los convenios internacionales pactados.

No obstante, en el caso de Colombia, pese a que desde 1974 había introducido el Código de Recursos Naturales con sanciones administrativas contra afectaciones de personas al ambiente, y el Código Penal en 1980 con delito ambientales, dichas normas tenían una mayor aproximación a los perjuicios económicos causados que devenían de los daños antijurídicos o típicos, en atención a un modelo neoclásico según manifiesta Gómez (2020), impidiendo un avance significativo en la legislación penal. De igual modo, la Asamblea Nacional Constituyente donde fue proferida la Constitución Política en 1991, pese a que creó importantes normas ambientales en atención a los tratados suscritos, y la Ley 99 de 1993 que estableció sanciones ambientales a cargo del Ministerio

de Medio Ambiente, no desarrollaron mayor normatividad penal asociada, pues se consideraba como un daño emergente que generaba afectaciones a la salud, trabajo o entorno.

Posteriormente, fue proferida la Ley 491 de 1999 y la Ley 599 de 2000, donde nacen algunas conductas punibles más autónomas, partiendo del Capítulo De los Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Congreso de la República, 2000). No obstante, esto creó algunas confusiones de aplicación, pues se seguía pensando la política criminal como se solía hacer en el régimen anterior, hasta que fue expedida la Ley 1333 de 2009 con la que se avanzó un poco, que detalló los mecanismos de coerción contra impactos y daños causados al medio ambiente. Luego, fue expedida la Ley 1453 de 2011 a través de la cual se modificaron e introdujeron otros tipos penales como la contaminación ambiental causada por residuos sólidos peligrosos (Gómez, 2020). Actualmente cursa un proyecto de Ley en el Congreso de la República que busca incorporar 17 nuevos delitos ambientales y modificar 11 ya existentes, aumentando las penas y sanciones, debido a las problemáticas derivadas de conductas punibles de este tipo, afectando con alarmantes cifras el ambiente nacional. Dentro de los tipos que esperan incluirse se encuentra la deforestación, el aleteo, el aprovechamiento ilícito de aguas y sus recursos, destrucción y comercio ilegal de coral y destrucción ilegal del suelo, ecocidio, destrucción o alteración de hábitad, destinación ilegal de tierras establecidas, apropiación ilegal de baldíos y financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, conforme ha señalado Semana Sostenible (2020). Al mismo tiempo, con esta norma se buscan reestructurar conductas ya descritas como la caza ilegal, explotación ilícita de yacimientos mineros, pesca ilegal y manejo ilícito de especies exóticas, manejo y uso ilícito de elementos peligrosos, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, la experimentación ilegal

con especies, agentes biológicos o bioquímicos y la invasión de áreas de especial importancia ecológica (2020).

De lo anterior, es menester tener en cuenta que de la historia de los delitos ambientales en Colombia, aún podría quedar trecho por recorrer, lo que implica desafíos para la protección y preservación del vía parque Isla de Salamanca, así como prever medidas sancionatorias efectivas en el marco de políticas criminales solidas que, entre la prevención y la sanción puedan surtir impactos positivos que disminuyan conductas punibles en el ecosistema, desde el de Incendio, hasta el de Ilícito aprovechamiento, delitos que van de la mano, especialmente en este territorio, donde se extrae carbón mineral de manera ilícita con fines de exportación, actividad que requiere de la quema de bosques y manglares, resultando así una señal de preocupación.

LA TEORÍA DEL DELITO AMBIENTAL

Para entender cómo se ha ido desarrollando desde la teoría las problemáticas ambientales asociadas a los delitos que confluyen en este entorno, debe tenerse en cuenta que tienen génesis en la economía, conforme a los postulados de la *crematística* y *oikonomía* de Aristóteles, citado por Alier et al (1987), quien percibe la importancia de la actividad económica en precio, abastecimiento y ciudad, lo cual supone la necesidad de administrar correctamente los recursos que se tienen en el entorno. Dicho esto, el uso eficiente de los recursos del Parque Isla de Salamanca y su cuidado es indispensable para la economía, pero debe responder a los parámetros que la norma y los estados han reconocido mediante el derecho internacional para la protección del ambiente.

Ahora bien, en su momento, con la teoría neoclásica de la economía surge el interés de analizar los problemas ambientales y entender los factores y variables que incidían en el Desarrollo, así como los efectos de cualquier acto que generara perturbación alguna. Esta concepción fue

planteada en un primer momento por autores como Benthan, Malthus, Von Thünen, Thomson, Cournot y Gossen, citados por Pérez (2009). Este pensamiento perduró hasta finales de los años sesenta, pues posteriormente iniciaron teorías más contemporáneas, que, en lugar de dar mayor importancia a la economía, se la daban al ambiente, para así, poder llegar al Desarrollo; uno integral, entendiendo el territorio, sus riquezas, las comunidades y las políticas económicas.

A esta última se le denominó teoría del Desarrollo sostenible, y surge en concreto con Brundtland (1987), quien en su informe, manifiesta la necesidad alcanzar el progreso, la preservación y el crecimiento como una necesidad para las generaciones futuras. Es decir, se le da mayor importancia al ambiente, reconociéndole como un medio, y el fin, el desarrollo.

Así las cosas, los Estados empiezan a asumir los avances teóricos, y organismos como la ONU, inciden en la conformación de tratados internacionales, como la Convención de Río de 1992, para la preservación del desarrollo sostenible mediante la protección de recursos naturales. Ello parte de la teoría para lograr la sostenibilidad de todos los recursos, planteada por Bojo et al (1990), quien expone que esto requiere de una comprensión del capital humano, el capital físico, los recursos ambientales y los recursos agotables. Tales postulados incidieron en la puesta en marcha de los OM, de los cuales, se actualizaron y renovaron a los ODS en la Convención de Río 2012 y, en 2015 con la Agenda Global.

Con a lo anterior, toma fuerza la teoría del principio de no regresión ambiental, planteada por Prieur (2012), donde define como imperativa no retroceder en materia política ni jurídica, respecto de los avances normativos que se han dado con relación a la protección del ambiente, y así, permanecer en un estado continuo de progreso, sin lugar a que se presenten regresiones que pueda transgredir los bienes jurídicos que han sido tutelados. Argumentos que el mismo autor, reitera para establecer como teoría “lo correctamente ambiental” (2019), que implica alcanzar el mayor

marco jurídico posible para la preservación ambiental, reconociendo el ambiente como derecho humano y estableciendo las bases para el constitucionalismo socioambiental a nivel global. Esto supone entonces, la necesidad de proteger y preservar jurídicamente en la mayor medida posible, el vía parque, por lo que se considera importante el proyecto de Ley que cursa actualmente en el Congreso de la República, tendiente a incumplir otras conductas punibles y revisar normas ya previas existentes respecto de sus penas.

De modo que, se establece una aproximación teórica del Derecho ante los cambios que se presentan social, política y económicamente, pues supone la necesidad de estar acorde a las circunstancias que se presentan en el marco de la vida en sociedad y las implicaciones que esto tiene, lo que implica la relevancia jurídica del vía parque, así como la necesidad que de un reconocimiento como sujeto de derechos, del mismo modo que lo ha sido el río Atrato o el Magdalena.

Así entonces, se encuentra una correlación a la teoría jurídica del delito formulada a finales del siglo XIX por autores como Liszt, Beling y Welzel, citados por Roxin (1979), quien agrupó los postulados con “Los tipos abiertos y elementos del deber jurídico” en (1970), por la cual un ciudadano que incurre en una conducta susceptible de imputación de responsabilidad, denominada delito, se ve sometido a la imposición y cumplimiento de una sanción denominada pena en la medida de sus implicaciones, máxime dadas las condiciones de antijuricidad y adecuación típica previstas, teniendo en cuenta que, en lo concreto, se tratan de delitos ambientales, cuya conducta repercute en la afectación al bien jurídico Estado, Nación y ambiente.

Por su parte, Zaffaroni (2006) profundiza frente a la teoría del delito como una conducta humana que encuentra una adecuación normativa en el Código Penal sobre comportamientos prohibidos que su comisión configura una pena, individualizando al sujeto como autor y tipo para derivar la imposición de la sanción, en los casos en el acto sea contrario al orden jurídico, es decir, típica;

pero además, que cuente con una responsabilidad adquirida y probada que se define como culpa. Así, distingue el delito como aquel que cuenta con un carácter genérico y con un carácter específico, donde se establece que de acuerdo a la conducta, se presenta tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en torno a los caracteres que tiene la pena determinada normativamente.

Luego entonces, la acción penal, la pena y el delito constituyen los elementos del ordenamiento jurídico en este ámbito, con un sistema que se encuentra revestido de funcionalidad jurídica por ser aplicable, y de trascendencia política, por marcar las bases del deber ser de la política criminal (2006). Ello, toda vez que, como lo plantea Conde (2018), el delito se manifiesta a partir del comportamiento humano y su devenir en torno a la acción del resultado doloso. En la órbita de la responsabilidad penal se encuentran derivados los delitos ambientales, cuya génesis, según Mosset et al (1999) parte de derecho ambiental, encargándose la tutela del ambiente mediante normas y principios rectores, para así regular los impactos e implicaciones de las actividades, acciones y omisiones del hombre en él. Por lo tanto, se determina el alcance, y dentro de este, el límite existente para ejecutar actividades, pero estas al ser transgresoras configuran una conducta sancionable de competencia para el derecho penal, y en lo que respecta, sobre los acontecidos en transgresión al vía parque Isla de Salamanca. Autores como Silva (2017), expresan la necesidad, desde la teoría, de revalorizar el ambiente en el marco de una sociedad democrática y participativa, con acceso a la justicia ambiental para el cumplimiento de los ODS. Por lo tanto, la configuración de delitos ambientales supone imperiosa efectividad de la actividad judicial. Ello además, conforme a la tesis planteada por Moreno (2002), frente a este tipo de conductas, en la cual establece que los bienes jurídicos protegidos en delitos ambientales, como el de Incendio, son la vida, la integridad, la propiedad y el medio ambiente, del que el ser humano es parte, y no el ambiente de este; aspectos que, confluyen en el vía parque y que requiere acciones.

Se tiene entonces que, las actividades generadoras y detonantes de delitos ambientales, según Kerguelén (2016), ponen de presente el aprovechamiento indiscriminado de recursos naturales, y mediante conductas como el Incendio, buscando fines económicos, se contradicen los avances que se han presentado desde el fin de la teoría neoclásica de la economía, por lo tanto, no resulta dable entrar en regresión jurídica, pues las implicaciones ecológicas que representan, ponen en riesgo el futuro de generaciones enteras y la efectividad de normatividad penal. El delito de incendio, es el más común presentado en el vía parque Isla de Salamanca, por lo tanto, se hace necesario que se prevean las medidas necesarias para garantizar su merma, desde estrategias de política criminal y adecuación de mayor rigor frente a la judicialización de este tipo de acciones antijurídicas.

DELITOS AMBIENTALES EN EL VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA

Se ha tornado frecuente ver y percibir a través de los sentidos la presencia de humo en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, así como en algunas otras locaciones del departamento del Magdalena, limítrofe con el Atlántico. Lo anterior, tiene que ver con las constantes quemaduras que se presentan en el Vía Parque Isla de Salamanca, lo cual desde hace años se ha presentado. La isla, es la única área protegida en el país con esta denominación debido a que cuenta con bosques secos tropicales y una gran extensión de manglares, ciénagas y playas que constituyen un ecosistema rico y diverso, que es en particular, un punto importante de tránsito de especies migratorias que atraviesan todo el continente americano (Parques Nacionales Naturales de Colombia, s.f.). Dicho ecosistema, se ha visto seriamente afectado por grandes incendios forestales que degradan sus biomas y ocasionan capas de contaminación atmosférica en la ciudad y demás poblaciones cercanas.

De conformidad a diversos estudios llevados a cabo por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, entidad gubernamental a la cual se le asigna el manejo administrativo de estas

zonas en el territorio, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, autoridad ejecutiva asignada del poder central, han determinado que desde 2013 se han registrado 80 incendios aproximadamente, cuya motivación ha sido dolosa y con fines delictivos. Tales actos se encuentran asociados a la quema de residuos, la caza ilegal e indiscriminada de especies, la extracción ilegal de carbón y la apropiación de tierras; como también, no deja de ser otra preocupación que sea esta una ruta para el narcotráfico, utilizada por grupos al margen de la Ley (Semana Sostenible, 2020). Mediante las investigaciones de El Tiempo (2020) y Seguimiento (2020), entre 2018 y 2020 se puede establecer un incremento considerable en el número de incendios, al haberse presentado un promedio de 15 casos, pudiendo duplicarse el número de los que no han podido ser registrados. Lo anterior implica que se está en presencia del delito de incendio, sobre autores y determinadores de este.

El artículo 350 del Código Penal establece el delito de Incendio, el cual se constituye como de peligro común y causante de graves perjuicios a la comunidad. Consiste en, quien con peligro común prenda fuego contra objetos de interés científico, histórico, cultural o bienes de uso público, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses y multa de 13.33 a 750 smlmv (Congreso de la República, 2000). Este tipo penal deja entrever que guarda como objeto jurídico, sancionar la transgresión a la preservación y protección, en estricto sentido, sobre los perjuicios causados a la sociedad civil y a los recursos naturales. Así mismo, la pena se aumentará hasta en la mitad cuando con los hechos se afectaran bosques, recursos florísticos y áreas de importancia ecológica como es el caso del Vía Parque, pues, con base en lo descrito anteriormente, existe una relación entre el bien jurídico tutelado y los impactos ocasionados de dicha conducta, toda vez que incide en la puesta en peligro del bienestar común.

Ahora bien, el delito de incendio ha sido analizado por Rodríguez (2018) quien ha señalado que constituye una problemática inconmensurable, pues, tiene efectos devastadores en la naturaleza y generan una alta sensación de peligro en la población, sumado a un alto índice de impunidad registrado por la dificultad que representa determinar los autores, así como determinadores –si los hubiera- (Rodríguez Pontevedra, 2018). El bien jurídico cumple un rol fundamental en lo que respecta al delito de incendio, pues, si se remite la discusión a la teoría del delito, se tiene que, a partir del bien lesionado se establece la categoría en la cual se ven afectados los intereses sociales o particulares (Politoff, 1993, pág. 29). Lo anterior tiene que ver concretamente con la forma de afectación de este bien jurídico en la Isla, debido a que se debe distinguir entre los delitos de apropiación con los de destrucción, como señala Oliver (2013), quien además, ubica la conducta típica en el grupo de los de destrucción (Oliver, 2013, pág. 32). Ello, si se observa desde la hermenéutica, los incendios presentados en la Isla de Salamanca además de aproximarse a un delito de destrucción, lo hace la descripción típica que establece el Código Penal colombiano, según el cual, genera un peligro común al ocasionar afectaciones concretas y determinadas.

Es necesario comprender que la Isla de Salamanca forma parte del patrimonio nacional al ser una zona de reserva forestal, por lo tanto, requiere preservarse en términos de la sanción penal aplicable, pero al tiempo, se debe precisar que la normatividad no discrimina entre la protección ambiental sobre la circunstancia de agravación que introduce, por lo que sería esta una oportunidad para legislar en función transgresiones ambientales, razón por la que en el Congreso de la República, cursa un proyecto de Ley que busca ahondar en la problemática (Semana Sostenible, 2020). En ese orden, al observar el tipo penal del delito de Incendio en el Vía Parque, se debe tener en cuenta los elementos que lo conforman, que son: los sujetos, el objeto y la conducta típica (Garrido, 2003, págs. 52-75). Ello implica la descripción de la conducta que constituye el tipo,

distinguiendo el sujeto que lleva a cabo la acción y el afectado o la afectación devenida, es decir, los sujetos activos y pasivos. Luego entonces, estándose en presencia de este tipo de características, es pertinente establecer sobre los actos en la Isla, el fortalecimiento institucional con capacidad de llevar a cabo las capturas de responsables, pues sobre esta se busca llevar a cabo la ocupación ilegal de predios (Semana Sostenible, 2020), sumado a otros intereses como la caza de especies y la explotación de recursos minerales como el carbón mineral (Semana, 2014).

Es por lo anterior que, en simultaneo con el delito de incendio, debe tenerse en cuenta que según las circunstancias fácticas que lo generan o motivan convergen delitos como el Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, el de Daño ambiental, el de Contaminación ambiental e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, entre otros. Dichas conductas, se encuentran descritas en el Código Penal de la siguiente forma:

El artículo 328 señala el delito de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que establece que, quien en incumplimiento de la normatividad existente se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos o genéticos de la biodiversidad nacional, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa de hasta 35000 smlmv. Lo anterior, acontece de manera ininterrumpida en la Isla, pues, los incendios, en gran mayoría de casos, tienen como propósito la extracción de carbón para comercio ilegal, del mismo modo que se caza continuamente especies exóticas para comercio ilegal de fauna (Semana, 2015).

Así mismo, el artículo 331 define el delito de Daño en los recursos naturales, mediante el cual quien destruya inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo dañe los recursos naturales, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa de 133.33 a 15000 smlmv; conducta que se

encuentra relacionada al artículo 332 que señala el delito de Contaminación ambiental, estableciendo que quien provoque, contamine o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo o subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, poniendo en peligro la salud humana y los recursos naturales mismos, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que ha lugar, incurrirá en prisión de 55 a 112 meses y multa de 140 a 50000 smlmv. De lo anterior, resulta pertinente precisar que de los efectos derivados del Incendio, cuyos impactos ambientales crean deforestación, desertificación y pérdida del hábitat, incluyendo sus especies (El Tiempo, 2020). La pena previamente enunciada, se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando con los hechos concurren, delimitado al objeto de este estudio, la contaminación, descarga disposición o vertimiento en zonas protegidas de importancia ecológica, así como también si una industria fuera responsable, evento que tiene lugar en la Isla debido a que se puede descargar la proximidad que existe de industrias con la comisión de este tipo de hechos en el Vía Parque. De igual modo, el artículo 333 dispone el delito de Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, ante el que provoque y contamine los recursos naturales por extracción y explotación mineral incurrirá en prisión de 5 a 10 años y multa de 10000 a 50000 smlmv, sobre lo cual, debe tenerse en cuenta que en la Isla se presentan yacimientos de carbón mineral, no obstante, al estarse en una zona de reserva forestal y por tanto de especial protección, dicha actividad se encuentra prohibida.

Por su parte, el artículo 336 establece el delito de Caza ilegal sobre quien la ejerza en incumplimiento a las normas y la protección de los recursos naturales, con pena de 16 a 54 meses y multa de 26.66 a 750 smlmv, lo cual, es otro de los motivos por los cuales se presentan incendios, pues, de esta forma delimitan los sectores en los que permanecen las especies, obligándolas a

desplazarse en ubicaciones donde colocan trampas, como ha señalado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, adicionalmente ha ordenado cerrar y militarizar la Vía Parque (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). A su vez, confluye el artículo 337 que determina el delito de Invasión de Áreas de especial importancia ecológica, sobre quien invada zonas de especial protección por sus recursos naturales, con una pena de 48 a 144 meses de prisión y multa de 133.33 a 50000 smlmv, conducta que se aumenta a una tercera parte tras la afectación grave a la calificación del territorio, máxime sobre quien promueva, financie, dirija o se beneficie de estas conductas. Misma que, se presenta en el Vía Parque (Semana Sostenible, 2020).

Así las cosas, se podría estar en presencia de una problemática ambiental que devendría en desafíos para el cumplimiento de los ODS, tornando necesario, valorar la efectividad judicial sobre esta situación, así como el grado de efectividad y eficacia de la normatividad. Lo anterior tiene que ver con las metas propuestas por el objetivo 13 sobre las acciones por el clima que ameritan los Estados llevar a cabo para combatir el cambio climático, el objetivo 14 sobre la preservación de los ecosistemas marinos por su relevancia ambiental y el objetivo 15 sobre la preservación y protección de los ecosistemas terrestres, todo estos, que confluyen en la Isla. Del mismo modo, resulta aplicables al numeral 3 y 16 como objetivos tendientes a la adopción de medidas tendientes a mejorar la salud de las poblaciones y propender por la justicia e instituciones sólidas con una institucionalidad capaz de atender las necesidades de las comunidades (UN, 2015).

Los objetivos de desarrollo sostenible son una serie de recomendaciones para la adopción de políticas universales, viables desde la institucionalidad y la aplicación ciudadana para atender las necesidades que presenta la humanidad, tales como pobreza, la protección del planeta y la garantía de agendas sobre la paz y la prosperidad, metas que se encuentran fijadas para ser cumplidas a 2030 (UN, 2015). En términos de la ONU, los ODS se encuentran agrupados y divididos en 17

pilares fundamentales para su cumplimiento, buscando el desarrollo y el equilibrio social, ambiental y económico; para lo cual, los gobiernos, sectores privados, sociedad civil y ciudadanía articulan sus esfuerzos (UN, 2015). En ese sentido, se hace indispensable la preservación de la Isla de Salamanca, si se tiene en cuenta que, Colombia es sin duda uno de los países de mayor relevancia ambiental del planeta, pues presenta 10% de la biodiversidad en 0.7% de la superficie terrestre, posicionándola como un país megadiverso, segundo después de Brasil, como expone Sotelo (2017). No obstante, al tiempo, tiene grandes problemáticas que ponen en peligro sus riquezas, la vida de sus ciudadanos y el cumplimiento de los ODS, pues de delitos ambientales se han provocado grandes degradaciones producto de la deforestación por incendios, tala y explotación ilícita de recursos, que van en aumento y parece no tener control según ha señalado El Tiempo (2020). Lo anterior, pone de presente una circunstancia que afecta zonas reconocidas como de especial protección y reserva forestal, que suman el 52% de todo el territorio nacional (2017). Lo anterior, pues, es menester comprender que los delitos ambientales requieren de una contra respuesta estructurada desde el ordenamiento jurídico, mediante el uso de sistemas adecuados de investigación y justicia, así como de políticas criminales efectivas, por lo que se presentan desafíos para los Estados hacer frente a estas redes que se expanden entre países, requiriéndose de esfuerzos de cooperación internacional para la judicialización y prevención de estos escenarios. Por lo tanto, se gesta una tarea pendiente frente al cumplimiento de los ODS, y concretamente, el fortalecimiento de la legislación penal, toda vez que, una de las grandes preocupaciones para la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU) y los Estados, es que desde 2014 se han incrementado exponencialmente los delitos ambientales, que en el mercado representan valores estimados entre los 70 mil y los 213 mil millones de dólares, alcanzando un máximo registrado posteriormente de entre 91 mil y los 258 mil millones de dólares en 2016, significando un

incremento cada dos años de 26%, constituyendo el cuarto negocio criminal del planeta. De igual forma, el crecimiento anual de las conductas punibles ha aumentado entre el 5% y el 7% anual; cifras que son alarmantes, pues supone un crecimiento incluso superior al PIB mundial (2016).

La explotación de recursos naturales a nivel mundial incide en la vida diaria y afecta todos los recursos naturales y el aire. Lo anterior, por cuanto de estos surgen comportamientos antijurídicos que devienen en delitos contra el ambiente, cuyos impactos inciden en la salud, el planeta y las generaciones futuras. Dicha problemática no discrimina usualmente de fronteras, pues en gran porcentaje de los casos, los delitos tienen fines que las trascienden, como el tráfico de minerales y especies, comercio ilegal de madera, entre otros, para exportación, y que especialmente, detonan grandes incendios forestales, aspectos que han sido estudiados por la Interpol (2020).

A diferencia de otros delitos, los ambientales versan en estricto sentido sobre recursos naturales que son finitos, es decir, en un punto podrían agotarse y causarse daños irreversibles sino se tratan eficiente y sosteniblemente para que sean preservados y protegidos, lo que implica la urgencia por combatir tales conductas que, según el Informe de la Unidad de Seguridad Medioambiental de la Interpol (2020) constituyen un peligro para la humanidad. Aunado a lo anterior, estas conductas, en todo caso, van de la mano a otros delitos, confluyendo en conexidad, o uno lleva al otro.

Ahora bien, en Latinoamérica se encuentran las mayores problemáticas ambientales derivadas de delitos, pues, en estos territorios se presenta el mayor número de incendios forestales derivados de conductas punibles por año. Lo anterior, deviene en grandes impactos como la deforestación, siendo un resultado de prácticas como la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles y otras formas de explotación de recursos que repercuten en la economía. Al mismo tiempo, organizaciones criminales y autoridades locales se benefician a través de redes de corrupción; todo ello, sobre unos de los territorios más ricos en biodiversidad del planeta, que cuenta con el

amazonas, la cordillera de los Andes, los llanos y zonas costeras con aguas interiores y exteriores únicas en biomas y especies, así como grandes reservas hídricas, conforme a lo estudiado por Bjorken (2019).

Es preciso manifestar que el común denominador de la estructura legal y estatal en Latinoamérica para la persecución de los delitos ambientales, es el de la prohibición, ello para entender un poco el panorama. Por un lado, se encuentra la prohibición de explotación sobre flora, fauna, minerales y otros recursos naturales. Por otro, se tiene la prohibición de vertimientos, como mercurio en oro, o residuos de construcción. En simultáneo, cuenta con una estructura basada en: policía, fiscalía y tribunales quienes aplican políticas criminales establecidas por el legislador. Dicha organización administrativa es expuesta por el Instituto Libertad Ideas para Chile (2018), y señala que Colombia cuenta con una Policía de Medio Ambiente, así como la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos y el Medio Ambiente, estándose así, antes con capacidad de respuesta contra el delito ambiental y los que guarden relación de peligro común como el de Incendio contra recursos naturales en el Vía Parque.

Con los incendios forestales presentados en el Vía Parque Isla de Salamanca, que se han tornado más frecuentes durante el periodo 2018-2020, se ha creado un ambiente de incertidumbre sobre la ciudadanía, respecto de la efectividad de las acciones judiciales y los desafíos ambientales que surgen para la protección del ecosistema de delitos como el Incendio, y otros que lo motivan o confluyen. Por tal razón, resulta de especial interés conocer cuáles son los delitos ambientales que tienen mayor presencia en el área, así como los ODS que se ven impactados, y a partir de ahí, definir las tareas pendientes desde el derecho penal, para adoptar medidas que puedan reducir esta problemática.

Lo que acontece en el vía parque Isla de Salamanca, parte de una necesidad que en todo caso, debe ser analizada bajo una óptica penal, pues mediante delitos ambientales que se cometen en ella, existen consecuencias jurídicas que guardan relación a cumplir cabalmente los ODS. Esto podría tener relación a una ineficacia de las sanciones penales derivadas que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico nacional, posiblemente por la necesidad de llevarse a cabo algunas precisiones de los delitos aplicados y la concreción judicial con que se le debe tratar. Del mismo modo, las políticas criminales en materia ambiental, que, sólo entre 2019 y 2020, se han tenido propuestas legislativas para incluir conductas punibles ambientales de mayor rigor (Semana Sostenible, 2020).

La situación que atraviesa el Vía Parque Isla de Salamanca tiene una relación que reiteradamente en el tiempo ha evidenciado delitos ambientales que confluyen en su territorio. De ahí que se parta de la necesidad de establecer, o hacerse una idea diagnóstica de la efectividad judicial con que se aplica la norma. Otra problemática que guarda relación a los delitos ambientales que se presentan en el Vía Parque Isla de Salamanca, proviene de los escasos estudios jurídicos aproximados a su situación, pues los datos y referencias que mayoritariamente se encuentran, parten de investigaciones periodísticas o la interpretación de referencias de otras áreas de conocimiento. Es por lo anterior que, existe un manto de dudas sobre su situación de preservación y prevención contra delitos ambientales.

Existe gran preocupación a la forma en que se le ha dado tratamiento a conductas punibles asociadas a delitos ambientales, máxime en territorios mega diversos como el Vía Parque Isla de Salamanca, donde existe un ecosistema de gran complejidad único en el país, por lo tanto, esto implica su necesaria protección por parte del Estado, pero a su vez este debe asegurarse de sancionar todas aquellas prácticas que le sean transgresoras y que degraden su fauna y flora. Por

esa razón, resulta imprescindible que se incrementen las acciones tendientes a la aplicación la prevención de la acción penal, según mayor control. Así mismo, es necesario que se determine el alcance judicial que la afectación tiene, pues, mientras se sigan presentando conductas que, luego del curso de un proceso, el capturado no tenga forma de reincidir en dichos actos según la severidad de la sanción. Lo anterior, no se considera un retroceso a la política criminal ni propiamente de la sanción, sino una medida de prevención, precisamente, contra la no regresión ambiental y el cumplimiento de los tratados internacionales para la defensa de estos territorios y la prevención de los delitos ambientales. Se torna importante, y se resaltan, los esfuerzos llevados a cabo por cumplir dichos parámetros con base en el proyecto de Ley que actualmente cursa en el Congreso de la República. No obstante, se hace necesario que este sea expedido oportunamente, pues, así, se tendrá mayor rigor sobre la explotación indiscriminada de la Isla. Desde la teoría y la normatividad, como se ve, responden a una historia incipiente, pero que, empieza a tomar fuerza desde comienzos del siglo XXI, fundamento convincente para que se profundice en la conceptualización de delitos ambientales, previéndolos no cómo una sanción con carácter de perjuicio, sino, frente a la existencia misma del ser humano y su entorno. Así, los Estados, y Colombia en particular, debe garantizar que terceros no logren trastocar las barreras entre el desarrollo económico y la comisión de delitos de este carácter.

La preservación de la Vía Parque Isla de Salamanca implica esfuerzos sobre la comisión de delitos ambientales que entre los años 2018-2020 se han acrecentado, poniendo en riesgo la salud e integridad de la ciudad de Barranquilla mediante el Incendio, conducta tipificada, pero también mediante las prácticas que devienen el anterior, mediante la explotación, tala y tráfico ilícitos. De lo anterior, se amerita entonces, que el Estado imponga las sanciones más idóneas para la protección ambiental., y en igual forma, atienda al cumplimiento de los ODS. Pocos son los

estudios jurídicos que existen en torno a los delitos ambientales y sus impactos sobre estos escenarios naturales y su ciudadanía, menos frente a los desafíos que se presentan para el cumplimiento de los ODS, razón por la que es imprescindible una eventual investigación para contribuir en la ampliación de datos sobre la situación que enfrenta el Vía Parque Isla de Salamanca, así como precisar los alcances que tiene en el ordenamiento jurídico y su poder punitivo para la preservación de los bienes jurídicos al respecto. Ello lleva a que exista una necesidad de una exploración investigativa, abriendo una puerta que posibilite aumentar el número de estudios, comparaciones en intervalos temporales o estudios cuantitativos y cualitativos por separado, que supongan nuevas perspectivas, enriqueciendo los escenarios académicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIDA. (30 de marzo de 2020). *El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos*. (F. Ortúza, Editor) Obtenido de aida-americas.org: <https://aida-americas.org/es/blog/el-derecho-internacional-ambiental-historia-e-hitos>
- Bjorken, M. (2019). Delitos Ambientales en Latino América: El robo de la naturaleza y el envenenamiento de la tierra. *Crítica Penal y Poder, n°16, Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona*, 152-157.
- Bojo, J; Maler, K & Unemo, L. (1990). *Environment and development: an economic approach*. Dordrecht: Kluwer.
- Brundtland, G. (1987). *Informe Brundtland*. Washington: OMS.
- Carson, R. (1962). *Silent Spring*. Mariner book.
- Conde, F. (2018). *Teoría General del Delito* (Quinta reimpresión de la tercera edición ed.). Bogotá: Temis S.A.
- Congreso de la República. (22 de diciembre de 1993). Ley 99 de 1993. *Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y*

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones(...). Bogotá.

Congreso de la República. (9 de noviembre de 1994). Ley 165 de 1994. *Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992*. Bogotá.

Congreso de la República. (24 de julio de 2000). *Código Penal (Ley 599 de 2000)*. Bogotá: Legis.

Congreso de la República. (24 de julio de 2000). Ley 599 de 2000. *Por la cual se expide el Código Penal*. Bogotá.

Congreso de la República. (21 de julio de 2009). Ley 1333 de 2009. *Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*. Bogotá.

El Heraldo. (1 de septiembre de 2015). Armada y Policía incautan carbón de mangle: dos capturados en Parque Isla Salamanca. *elheraldo.co*. Obtenido de <https://www.elheraldo.co/judicial/armada-y-policia-incautan-carbon-de-mangle-dos-capturados-en-parque-isla-salamanca-204972>

El Tiempo. (11 de agosto de 2020). \$500 millones cuesta atender cada incendio en la Isla de Salamanca. *El Tiempo*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/siguen-los-incendios-forestales-en-la-isla-de-salamanca-528228>

El Tiempo. (27 de abril de 2020). La deforestación va a un ritmo exagerado con o sin pandemia. *eltiempo.co*. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/la-deforestacion-va-a-un-ritmo-exagerado-con-o-sin-pandemia-488750>

Fiscalía General de la Nación. (30 de diciembre de 2011). Resolución 0-3438 de 2011. *por la cual se crea y reglamenta la estructura y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como su sede de operación*. Bogotá.

Garrido, M. (2003). *Derecho Penal: Parte General. Tomo 2*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.

- Gómez, L. (2020). La criminalización de delitos ambientales en Colombia: Una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal. *Derecho Pontificia Universidad Javeriana*, 137-162.
- Hernández, R. (2014). *Metodología de la Investigación* (6° ed.). México D.F: McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A de C.V.
- Instituto Libertad Ideas para Chile. (2018). *Persecución de delitos ambientales en América Latina. Informe comparado para el estudio de los proyectos de Ley que establecen delitos ambientales en nuestro ordenamiento jurídico*. Santiago de Chile: Instituto Libertad.
- INTERPOL. (2020). *Delitos contra el medio ambiente*. Obtenido de [interpol.int: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-medio-ambiente](https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-medio-ambiente)
- Joan Martínez Alier y Klaus Schlümpmann. (1987). *La ecología y la Economía*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Kerguelén, E. (2016). Antecedentes del derecho ambiental colombiano. *Derecho y Sociedad*, (1), 1-10.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (15 de mayo de 2015). *Minambiente y autoridades locales cerraron el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca*. Obtenido de [minambiente.gov.co: https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/1794-minambiente-y-autoridades-locales-cerraron-el-parque-nacional-natural-isla-de-salamanca](https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/1794-minambiente-y-autoridades-locales-cerraron-el-parque-nacional-natural-isla-de-salamanca)
- Moreno, M. (2002). *El concepto penal de incendio desde la teoría del caos (Una perspectiva sistémica de los bienes jurídicos colectivos, del peligro y de su causalidad)*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Mosset, J et al; Hutchinson, T & Donna, E. (1999). *Daño ambiental. Tomo I*. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni.
- Oliver, G. (2013). *Delitos con la propiedad*. Santiago de Chile: Legal Publishing and Thomson Reuters.

- ONU & PNUMA. (2016). *Informe Anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente*. New York: ONU.
- ONU. (1987). Protocolo de Montreal. Montreal.
- ONU. (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica. *Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)*. Rio de Janeiro.
- ONU. (1994). Convención de Marrakech. Marrakech.
- ONU. (2000). Declaración del Milenio. New York.
- ONU. (2002). Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo.
- ONU. (2012). Convención de París. *Tercera Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible*. París.
- Orellana, M. (2002). Derecho penal ambiental comparado: El Common Law. *Chilena de Derecho*, 29(2), 442.
- Parques Nacionales Naturales de Colombia. (s.f.). *Vía Parque Isla Salamanca*. Recuperado el 24 de agosto de 2020, de [parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co): <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-caribe/via-parque-isla-de-salamanca/>
- Pérez, E. (2009). Desarrollo y medio ambiente. Algunas miradas desde las ciencias sociales. *Mexicana de ciencias políticas y sociales*, 51(205).
- PNUMA. (1972). *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente*. Obtenido de un.org/pnuma: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/>
- Politoff, S. (1993). *Derecho Penal Chileno: Parte Especial; delitos contra el individuo en condiciones físicas*. Santiago de Chile: Jurídica de Chile.
- Presidencia de la República. (18 de diciembre de 1974). Decreto 2811 de 1974. *Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*. Bogotá.

- Presidencia de la República. (4 de octubre de 2010). Decreto 3678 de 2010. *por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones*. Bogotá.
- Prieur, M. (2012). Non-regression in environmental law IUCN Commissions. *Sapiens Vol.5 / n°2*.
- Prieur, M. (2019). *Droit de l'environnement - 8e éd. (Précis) (French Edition)*. (C. & Sotelo, Trad.) Paris: Dalloz.
- Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Real Academia Española.
- Real Academia Española. (2020). *Diccionario panhispánico del español jurídico*. Obtenido de dpej.rae.es: <https://dpej.rae.es/>
- República de Colombia. (20 de julio de 1991). Constitución Política de la República de Colombia. Bogotá: Legis.
- Rodríguez Pontevedra, J. (2018). Los delitos de incendio. *Revista electrónica de derecho ambiental*, 33. Obtenido de https://huespedes.cica.es/gimadus/33/05_los_delitos_de_incendio.html
- Roxin, C. (1970). *Offene Tatbestände und rechtspflichtmerkmale*. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
- Roxin, C. (1979). *Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico* (1° ed.). (E. Bacigalupo, Ed., & v. a. castellano, Trad.) Buenos Aires: Depalma.
- Seguimiento. (19 de agosto de 2020). *47 incendios se han registrado desde el 2014 hasta la fecha en 'Isla Salamanca', según Parques Nacionales*. Obtenido de Seguimiento.co: <https://seguimiento.co/magdalena/47-incendios-se-han-registrado-desde-el-2014-hasta-la-fecha-en-isla-salamanca-segun>
- Semana. (6 de 10 de 2014). *Parque Isla de Salamanca, entre el carbón y las llamas*. Obtenido de semana.com: <https://www.semana.com/nacion/articulo/barranquilla-ve-peligrar-el-parque-isla-de-salamanca/391164-3/>

- Semana. (9 de enero de 2015). Los verdugos del Parque Isla de Salamanca. *semana.com*. Obtenido de <https://www.semana.com/nacion/articulo/capturados-criminales-del-parque-isla-de-salamanca/440852-3>
- Semana Sostenible. (19 de 06| de 2020). *Imposible respirar en Barranquilla por incendios en Parque Isla de Salamanca*. Obtenido de [sostenibilidad.semana.com: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/imposible-respirar-en-barranquilla-por-incendios-en-parque-isla-de-salamanca/52103](https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/imposible-respirar-en-barranquilla-por-incendios-en-parque-isla-de-salamanca/52103)
- Semana Sostenible. (9 de agosto de 2020). Incendios devoran área importante del Vía Parque Isla de Salamanca. *sostenibilidad.semana.co*. Obtenido de <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/incendios-devoran-parte-del-via-parque-isla-de-salamanca-i-colombia-hoy/53961>
- Semana Sostenible. (16 de junio de 2020). Proponen incorporar 17 nuevos delitos ambientales en el Código Penal. *sostenibilidad.semana.com*. Obtenido de <https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/proponen-incorporar-17-nuevos-delitos-ambientales-en-el-codigo-penal/51941>
- Silva, F. (2017). Medio ambiente sano y justicia ambiental. *Ujat*, 5(9), 182-194.
- Sotelo, C et al. (2017). Desafíos ambientales para la construcción de un postconflicto sostenible. *Erg@omnes*, vol.9(1), 53-75.
- UN. (1972). Declaración de Estocolmo. *Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano*. Estocolmo.
- UN. (20 de may de 1992). Conference for the Adoption of the Convention on Biological Diversity. Nairobi.
- UN. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Obtenido de [un.org/sustainabledevelopment: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/](https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)
- Zaffaroni, E. (2006). *Manual de Derecho Penal - Parte General*. Buenos Aires: Ediar.